

ADEMÁS

Mercados abiertos, pactos sociales

Introducción al libro *Mercados abiertos, pactos sociales*, de próxima publicación por el Fondo de Cultura Económica. La obra es una disección de las grandes transformaciones y deformaciones económicas y sociales de las últimas décadas, y una propuesta para introducir un mejor equilibrio público-privado sin regresar la historia.

DAVID IBARRA

En el último cuarto del siglo xx el mundo emprendió un notable experimento con la transformación globalizadora del orden económico internacional, sólo comparable en sus alcances a la Revolución industrial inglesa del siglo xix. Ayer como hoy, los cambios, sin descontar sus efectos positivos, causaron —y siguen causando— profundas inestabilidades socioeconómicas y hondos desarreglos distributivos que tomará años componer. Ahora, la apertura de fronteras lleva a la disolución o empobrecimiento de muchos de los acuerdos que habían sometido a control social el comportamiento de las economías. La integración universal de los mercados dio a luz un sistema económico parcialmente inmune a sus consecuencias sociales dentro de cada nación. El orden de la globalización diseñado por las potencias dominantes postula, como camino único, una utopía universalista aplicable a cualquier sociedad humana decidida a cerrar su pasado, a abrazar un individualismo radical, a desdeñar la acción colectiva para disfrutar plenamente de los beneficios de la competitividad internacional, soslayando su impacto en términos de equidad o cohesión políticas. Se confió y se confía en que la eficiencia —aun de los monopolios— acabe por filtrarse a todos los estratos sociales y que la capacidad innovativa atribuida a los mercados produzca bienestar y crecimiento de manera automática. En aras de esa ideología esperanzadora se debieron debilitar y hasta demoler, repito, los pactos políticos que armonizaban mercados abiertos y pactos sociales y el funcionamiento de los mercados con los postulados de las democracias nacionales.¹

1 Ese universalismo macroglobal que postula políticas uniformes, semejantes, en todos los países, contrasta con el segundo ingrediente de las políticas en boga: un individualismo microsocioal, diversificador de inclinaciones y preferencias que suele actuar en contra de los propósitos nacionales y universales de la igualdad y la solidaridad sociales. En sus orígenes, el individualismo de la Ilustración se concibió como la afirmación de la libertad de creencias, como el antidoto al dogma, como el cimiento de la tolerancia y de la paz. Hoy, el individualismo economicista no descansa en la

Recuérdese aquí el gran acomodo político entre países del siglo xvii, el de la paz de Westfalia, que erigió el concepto de soberanía nacional y rechazó todo universalismo, fuese ideológico, religioso o económico. Otorgó, en cambio, libertad de credo, de cultura y, en general, de diseño nacional de las políticas. Así se aseguró la coexistencia pacífica de las naciones, recurriendo al principio regulador del equilibrio entre los miembros de la comunidad internacional mediante alianzas pragmáticas, variables, que impidiesen la ascensión hegemónica de algunos de ellos. La concepción westfaliana sirvió por siglos para evitar conflagraciones bélicas. Todavía estuvo parcialmente vigente durante la Guerra Fría, pero recibió un golpe devastador con el universalismo económico de la globalización que, al reducir el ámbito de las soberanías nacionales, sustituyó el dogmatismo religioso transfronterizo por una suerte de canon económico carente de normatividad, de la acción atemperadora de pactos sociales de alcance universal.²

A la ruptura de los principios westfalianos³ se suma el desmoronamiento del otro gran acomodo de la convivencia política del siglo xx entre democracias y capitalismo. Ese pacto consistió en proteger la vida democrática de las interferencias abusivas del poder económico, refrendando la soberanía de los gobiernos en decisiones fundamentales, determinantes de la política de empleo, crecimiento y protección social.⁴ Así, se procuraba aliviar el malestar causado por las fluctuaciones cíclicas, las crisis económicas o los conflictos resultantes de la concentración de ingreso y riqueza, mientras se competía políticamente con el socialismo soviético. Aun cuando ello creó separaciones nacionales, el resguardo de la soberanía de los gobiernos les permitió elegir y responsabilizarse de la ruta de su desarrollo, en tanto garantes del bienestar de sus poblaciones.

Algunos componentes medulares de esos grandes arreglos históricos resultaron incompatibles con las exigencias de los mercados sin trabas y con el cambio obligado de prelación en los objetivos nacionales. El crecimiento, el empleo y las metas distributivas fueron remplazados por el logro de la estabilidad de precios y el equilibrio de las finanzas públicas, ambas metas congruentes con el libre comercio. La lucha por la eficiencia, la innovación, la competitividad, pasó a ser considerada vital en un mundo abierto, necesitado, además, de limitar y hasta proscribir la intervención estatal en materia económica, excepto cuando estuviere enderezada a desregular, transferir funciones de gobiernos a mercados o a salvar a empresarios o bancos de la quiebra.⁵

Ese cambio ideológico en los países líderes, junto al desmoronamiento del socialismo soviético, frenó la nivelación de los beneficios del crecimiento económico entre las distintas capas sociales de las zonas industrializadas o de muchas en desarrollo y, por tanto, el avance progresivo de los Estados de

libertad de creencias, sino en la libertad de mercados, en la validación de la competencia eficientista que rechaza casi toda acción social colectiva, como la vía de acceso al crecimiento y al bienestar humanos. Véase en F. Williams (1992), "Somewhere over the Rainbow: Universality and Diversity in Social Policy", *Social Policy Review*, 4, pp. 200-219; B. Rothstein (2001), "The Universal Welfare State as a Social Dilemma", *Rationality and Society*, 13 (2), pp. 213-233; G. Esping-Andersen (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Princeton University Press, Princeton; G. Duménil y D. Lévy (2011), *The Crisis of Neoliberalism*, Harvard College, Boston; R. Frank y P. Cook (1995), *The Winner-Take-All Society*, The Free Press, Nueva York; F. Fukuyama (1992), *The End of History and the Last Man*, Hamish Hamilton, Londres; J. Gray (1998), *False Dawn*, The New Press, Nueva York; J. Habermas (1981), "Modernity versus Postmodernity", *New German Critique*, 22, pp. 3-14; E. Huber y J. Stephens (2001), *Development and Crisis of the Welfare State*, The University of Chicago Press, Chicago; D. Ibarra (2008), *La degradación de las utopías*, Facultad de Economía, UNAM, México; N. Luhmann (1998), *Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general*, Anthropos, Barcelona; K. Polanyi (1944), *The Great Transformation*, Beacon Press, Boston, y R. Skidelsky (1977), *The End of the Keynesian Era*, Palgrave Macmillan, Londres.

2 Véase L. Gross (1948), "La paz de Westfalia", *Revista Americana de Derecho Internacional*, 42, pp. 20-41, y H. Kissinger (2014), *World Order*, Penguin Press, Nueva York.

3 La visión westfaliana resultó desplazada en Europa al ganar hegemonía Alemania en la política económica de la comunidad, desplazando a Francia e Italia, entre otros países.

4 En sus orígenes, el nacimiento del Estado de bienestar europeo fue una creación conservadora de fines del siglo xix —Bismarck y Lloyd George— como medio de apaciguar a la clase obrera, sin afectar el control político y económico de las élites.

5 Así llega a sostenerse que los mercados deciden mejor que los cuerpos políticos. Por tanto, la justicia del mercado en que cada quien recibe conforme a lo que aporta al producto, es mejor que la justicia política de los derechos humanos, que es criticada por conducir al desperdicio de recursos escasos. Curiosamente, la salida parcial de la Gran Recesión de 2008 obligó a la mayor intervención gubernamental de la historia, a interrumpir las reglas antiintervencionistas de los mercados, curiosamente en tiempos de condena a la manipulación estatal de los asuntos económicos.

bienestar. Antes, durante buena parte del siglo xx, paradójicamente si se quiere, las guerras mundiales, las tareas de reconstrucción y luego los ajustes sociales anticrisis —el *New Deal* en Estados Unidos y la socialdemocracia en Europa— habían revertido la acentuada concentración del ingreso típica del siglo xix al sostener políticas igualitarias de desarrollo y gastos extraordinarios de los gobiernos.⁶ Tal es el proceso histórico que contraviene, proponiéndoselo o no, el nuevo paradigma de la libertad de mercados. El tránsito de la socialdemocracia europea y del *New Deal* estadounidense al neoliberalismo de Reagan o Thatcher fue mucho más que una confrontación de ideas: significó un cambio de élites de distinta composición y la reorientación del poder económico de los gobiernos.

Al elevar competitividad y eficiencia económica a la consideración de principios ordenadores, de objetivos fundamentales de la vida social, el neoliberalismo instaaura la desigualdad como el resultado necesario del juego económico. La competencia es un simulacro bélico en el que siempre hay ganadores y perdedores que se consolidan a medida que el juego se repite en el tiempo. Atemperar esos resultados con intervención estatal, esto es, con regulaciones normativas, rompe el libre funcionamiento de los mercados. Las desigualdades resultantes son el premio a los más competitivos, los más eficientes, que debieran ser aplaudidos, no combatidos. Por otro lado, ese enfoque es congruente con los nuevos principios del intervencionismo estatal y de las leyes económicas: favorecer la libertad de mercados, no enturbiarla persiguiendo otras finalidades económicas o sociales.⁷

Esa sustitución paradigmática a partir de la séptima década del siglo pasado da nacimiento universal a dos estrategias de desarrollo con ingredientes comunes: el crecimiento hacia fuera y el crédito a familias y gobiernos como sostenes de la demanda de los países. Ambos enfoques, compatibles con la apertura de mercados y con el vuelco político hacia objetivos eficientistas, eluden, sin resolverlas, tensiones distributivas y desarrollistas al completar artificialmente el gasto de las sociedades ya sea captando demanda externa o supliéndola transitoriamente con la expansión del crédito.

Se trata de estrategias que al final de cuentas no llenan la insuficiencia del poder de compra de las poblaciones ni alientan la inversión, frente a la concentración del ingreso derivado de la ruptura de los pactos sociales. El modelo de crecimiento hacia afuera tropieza a la corta o a la larga con un impedimento estructural: los países buscan exportar y, a la vez, restringir —aunque no lo manifiesten— sus importaciones, inmersos en una suerte de neomercantilismo interdependiente, singularmente acusado en tiempos de crisis.⁸ A su vez, la llamada democratización del crédito tiene como límite el rezago acumulativo de los ingresos familiares.⁹ Y, en cuanto al endeudamiento público, hay topes económicos y políticos que impiden sea sustituto eterno de la cortedad de la demanda privada. Ello es especialmente cierto cuando por razones políticas es difícil llenar el diferencial entre gastos gubernamentales en ascenso e ingresos públicos estancados por la crisis y la degradación de los impuestos progresivos.

Hasta ahora los resultados del experimento de la apertura externa o del creditismo han resultado en general poco halagüeños. Del lado positivo, la inflación ha cedido terreno y algunos países emergentes han crecido mucho y reducido su pobreza. En cambio, la inestabilidad económica no se ha erradicado como lo demuestran palmariamente la Gran Recesión de 2008-2009 o la generalizada concentración del ingreso. Además, cuando ocurren contracciones económicas resultan obstruidas ideológicamente

6 Véase T. Piketty (2014), *Capital in the Twenty-First Century*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass.

7 Véanse J. Peck et al. (2010), "Postneoliberalism and its Malcontents", *Antipode*, 41, SI, pp. 94-116; W. Davies (2013), *The Limits of Neoliberalism*, SAGE Publications, Los Ángeles; P. Krugman (1994), "Competitiveness: A Dangerous Obsession", *Foreign Affairs*, marzo-abril; R. Turner (2008), *Neoliberal Ideology*, Edinburgh University Press.

8 Desde luego, la supresión de las barreras al comercio alienta la eficiencia y la especialización, sobre todo al importar lo que se produce nacionalmente con mayores costos, siguiendo las tesis de las ventajas comparativas. Por otro lado, es dudoso que eso mismo genere más producción y empleos netos para todos, y que reduzca los desequilibrios de pagos internacionales. De aquí las poco publicitadas maniobras de gobiernos y zonas de integración para alimentar la devaluación de sus monedas y alimentar contiendas cambiarias.

9 En cierto sentido, los ingresos de las familias de los trabajadores que habían sostenido la prosperidad global de la posguerra fueron temporalmente justificados en Estados Unidos y otros países por el consumismo del crédito.

Cuadro I. Tasas reales de crecimiento del producto

Periodo	Mundo	Estados Unidos	Europa	Japón	Alemania	China	México
1950-1973 ^a	4.91	3.91	4.81	9.29	5.68	4.92	6.37
1973-2003 ^a	3.17	2.94	2.19	2.62	1.72	7.34	4.32
2004-2012 ^b	3.90	1.71	0.51	0.81	1.52	10.55	2.72
1973-2012 ^c	3.20	2.61	1.78	2.18	1.64	7.81	3.58
2009	0.00	-2.80	-4.50	-5.50	-4.50	9.20	-4.70
2014	3.40	2.40	0.90	-0.10	0.90	7.40	2.10

^a Las cifras de base son de A. Maddison, *The World Economy*, OCDE, París.

^b Las cifras de base son del FMI.

^c Los resultados son producto de la combinación de las dos fuentes de datos, que puede responder a metodologías distintas.

las vías de escape, prefiriéndose deprimir el gasto público, acentuar el desempleo, elevar impuestos indirectos o recurrir a devaluaciones internas, sin dar solución plena a crisis repetitivas y cada vez más prolongadas.

En consecuencia, la incertidumbre económica propia de la competencia en los mercados tiende a trascenderlos y a convertirse en incertidumbre política, en descontento de ciudadanos, trabajadores y clases medias en torno a resultados económicos que los desfavorecen casi sistemáticamente. En los hechos, el crecimiento de la economía global se ha contraído de 4.9% anual en el periodo 1950-1973 a 3.2% entre 1973 y 2012 (47%), aun tomando en cuenta el ascenso espectacular de China e India (cuadro I). La Gran Recesión ya rebasa los siete años de vigencia; además, Japón, Suiza y algunos países de la Unión Europea sufren el riesgo de la deflación.¹⁰

Del mismo modo se viven inestabilidad, contagios depresivos y enormes disparidades de ingreso y riqueza que quizá resulten políticamente insostenibles.¹¹

La transformación ideológica ha llevado al empobrecimiento de los instrumentos institucionales y jurídicos que ponían coto a la transformación del poder económico en poder sociopolítico. La expresión sintética de esa situación reside —coincido con Piketty— en que la tasa de remuneración del capital ha superado la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso, provocando con el tiempo desigualdades y desequilibrios, cuyas raíces debieran identificarse con la mayor nitidez posible. Detrás de ello, explicitándolo, hay una miríada de reformas jurídicas, institucionales y políticas que, a la par de dejar inermes a los gobiernos nacionales, confluyen en determinar menor crecimiento y sesgos que atentan el bienestar de las poblaciones.

Quiérase o no, se han trastocado el contenido y la dirección de las políticas públicas. En rigor, el neoliberalismo no persigue simplemente retirar al Estado de la vida económica, sino remodelarlo al igual que a las instituciones públicas, privadas y a la propia mentalidad de los individuos para hacerlos compatibles con los mercados y la globalización. El intervencionismo resultante —nacional e internacional— paradójicamente alcanza intensidad excepcional en la historia, como lo atestigua la apertura universal de mercados. Para instaurar esos objetivos el Estado neoliberal desplaza las viejas metas macroeconómicas de empleo y crecimiento.¹²

Ahora lo que importa es la estabilidad de precios, condición necesaria para mercados abiertos y para contener tentaciones políticas de los gobiernos. Por eso se otorga autonomía *de jure* o *de facto* a los bancos centrales para responsabilizarlos de la lucha anti-inflacionaria con independencia y por encima de cualquier otro objetivo de los gobiernos. Los fines redistributivos de la política fiscal (gastos e ingresos) y sus mismas funciones desarrollistas pierden

relevancia al ser debilitados *ex profeso*. En efecto, elevar impuestos se ha convertido en anatema, se da preeminencia macroeconómica al monetarismo, suprimiendo buena parte de la progresividad de los gravámenes —a la renta, a las herencias y a la riqueza— o tomando al equilibrio presupuestario como la meta a perseguir en cualquier circunstancia. Más que buscar el fortalecimiento de la tributación se ha recurrido a expropiar, privatizar o desregular más y más actividades económicas del Estado o a contratar deudas públicas, mientras se procura restringir el gasto destinado a la protección social de las poblaciones y a la inversión pública.

Otro tanto ocurre con la supresión deliberada de las capacidades conciliadoras de los mercados de trabajo. En efecto, las exigencias de la competitividad hacen trizas el compromiso vertebral de los modernos mercados de trabajo: reducir el activismo político de los trabajadores a cambio de otorgarles garantías de empleo y de protección social en economías cerradas.¹³ Como resultado, hoy prevalecen el desempleo crónico, la informalidad y una deteriorada influencia política de los trabajadores; además, se pagan salarios descendentes respecto al producto —resultado de la competencia internacional y la flexibilización laboral—, marcados fenómenos de *outsourcing*, desindustrialización, fragmentación o deterioro de las fuentes tradicionales de empleo y debilitamiento generalizado de los procesos de negociación colectiva. Poco ha quedado sano de las viejas funciones de los mercados de trabajo.

En buen número de países, el régimen de jubilaciones se ha reconvertido en negocio financiero privado, esto es, ha dejado de ser un derecho a recibir beneficios definidos al término de la vida laboral. El nuevo régimen se alimenta con el ahorro forzoso de los propios trabajadores y somete las pensiones resultantes al riesgo doble de las oscilaciones financieras y de la precariedad de los mercados de trabajo.

Por si fuese poco, la política industrial de numerosos países ha quedado maltrecha ante la abrupta apertura de los mercados, en ausencia de programas puntuales de reconversión productiva y de reconstitución de los multiplicadores de empleo. La consecuencia ha sido el resquebrajamiento o la migración competitiva de los puestos de trabajo mejor pagados de muchos países. Asimismo, el cambio tecnológico, sin la mediación de políticas favorables al empleo, atenuadoras de los efectos de una automatización destructora indiscriminada del mismo, se ha sumado a la desorganización de las protecciones a la mano de obra.

A mayor abundamiento, los paradigmas empresariales someten buena parte de la orientación estratégica de las empresas al control de las instituciones financieras. La maximización obligada del valor de las acciones —el llamado *share holder value*— reduce la formación potencial de capital y amplifica la concentración de los ingresos, sea en beneficio del propio sector financiero o de las remuneraciones de los dirigentes empresariales. El gigantismo de los bancos, aparte de concentrar sectorialmente las rentas, crea riesgos desestabilizadores mayúsculos, sea porque en las crisis resulten demasiado grandes para quebrar, como en Estados Unidos, o para ser salvados, como en buena parte de Europa. En todo caso, los rescates financieros obligan a la absorción masiva de deudas privadas por los fiscos y, en última instancia, por los contri-

¹³ En varios países se dan acuerdos complementarios semejantes. Por ejemplo, el convenio entre empresas y trabajadores de las industrias siderúrgica y automotriz de Estados Unidos (Tratado de Detroit), en el que los segundos ceden el control del manejo de los talleres a cambio de seguridad en el empleo y en los salarios. Véase S. Fraser (2015), *The Age of Acquiescence*, Little Brown, Nueva York.

buyentes, redistribuyendo regresivamente las cargas resultantes.

A lo anterior se añade la timidez competitiva de las políticas sociales, unida a factores demográficos, deformaciones e imperfecciones de los mercados y disparidades entre países que ocasionan el desorbitado desempleo juvenil, monstruosas tensiones migratorias, así como desigualdades mayúsculas en las remuneraciones entre empresarios, funcionarios y trabajadores, mucho más allá de sus respectivas contribuciones al producto. En torno a los señalamientos anteriores, no cabe olvidar la terciarización o informalización de gran número de economías —que invierten el tránsito de la mano de obra hacia actividades mejor remuneradas—, el abatimiento de las tasas de desarrollo de los países industrializados y emergentes, el envejecimiento de la población o el descuido del medio ambiente. Se trata de fenómenos de naturaleza diversa, cuya desatención conduce casi invariablemente a establecer diferencias abismales entre ricos y pobres.

También cuenta —y en mucho— la globalización como fenómeno que mueve las estructuras distributivas nacionales y las oportunidades del crecimiento universal. Dejar librados a la competencia internacional, casi sin regulación alguna, a los mercados de trabajo, a los regímenes impositivos o a los alicientes a la inversión devalúa radicalmente los alcances de las políticas públicas nacionales. Con frecuencia lleva a la precarización de las condiciones de trabajo, a la insuficiencia de los ingresos fiscales o a la necesidad de ofrecer atractivos excepcionales al ahorro externo.

Al propio tiempo, la globalización no reparte de manera pareja sus beneficios o costos: ahí están muchas de las tensiones migratorias para probarlo. Además, de tiempo en tiempo, casi inevitablemente, es causa de notorios desequilibrios comerciales y financieros.¹⁴ Unos países crecen mucho (India, China), otros se debaten en el estancamiento (muchos africanos). En América Latina, la inversión extranjera compró mercados ya construidos, demandas ya creadas, mediante privatizaciones y extranjerizaciones, sin constituirse en fuente decisiva de nuevo empleo o nueva producción; en cambio, en China creó, de raíz, oferta, puestos de trabajo y exportaciones antes inexistentes.

Por último, así como la apertura inicial de mercados determinó el auge del comercio en décadas pasadas, hoy se convierte en cadena transmisora de malestares internacionales. La pérdida de empuje del intercambio global, la crisis europea no resuelta, el actual receso latinoamericano —asociado al rompimiento de la burbuja internacional de las materias primas—, el abatimiento de las antiguas economías socialistas de Europa, la debacle griega, el repliegue del auge chino y de su mercado accionario, son otras tantas manifestaciones concatenadas de una interdependencia global deficientemente pensada y regulada.

En conclusión, hemos derruido buena parte del armazón social que sostenía normativamente la legitimidad de los gobiernos. Y se ha hecho por la presión de los países dominantes, con ayuda de un claro y desusado intervencionismo estatal de la gran mayoría de los países. Las constituciones nacionales han sido prácticamente reescritas o sus contenidos subvertidos por los acuerdos implícitos o explícitos de apoyo al nuevo orden económico internacional. En términos más concretos, la abrumadora, interminable, avalancha de reformas estructurales del neoliberalismo explican las desigualdades que se extienden en el mundo. Enmendar el desbarajuste distributivo prevaleciente demandaría tiempo y una reconstrucción casi utópica de los órdenes institucional, jurídico, económico y político que privan hoy día. Acceder a sociedades menos polarizadas, más dinámicas, entraña hacer a un lado intereses poderosos y pesadas inercias estructurales, así como ganar la disposición universal a comprometer esfuerzos cooperativos enormes. Entraña, en suma, la remodelación de la filosofía económica que hoy arrincona a la justicia y la democracia. Aun así, por escabrosas que sean las dificultades, por repetidos los tropiezos o lentos los avances, habrá que acercarse a un mejor equilibrio entre el individualismo eficientista y la equidad colectiva o, dicho en términos distintos, entre el interés público y los de orden privado. El reto no consiste en regresar la historia, sino en ganar la justicia democrática en las circunstancias creadas por la interdependencia global. •

¹⁴ La debacle griega, como antes las de Irlanda, Portugal e India, resaltan la ausencia de protocolos equitativos de ajuste entre países deudores y acreedores.

¹⁰ La deflación crea diferentes problemas macroeconómicos. Primero, hace más costoso el servicio de las deudas públicas y privadas. Asimismo, hace difícil la amortización de los préstamos, prolonga, cuando no agrava, la recuperación de las crisis. Segundo, en la medida en que crea perspectivas de baja de precios, propicia que consumidores e inversionistas pospongan su gasto y prolonguen la debilidad de la demanda.

¹¹ Véase J. Stiglitz (2012), *The Price of Inequality*, W. W. Norton, Nueva York; P. Krugman (2007), *The Conscience of a Liberal*, W. W. Norton, Nueva York; A. Atkinson et al. (2011), "Top Incomes in the Long Run of History", *Journal of Economic Literature*, 49 (1), pp. 3-71; T. Piketty y E. Saez (2003), "Income Inequality in the United States, 1913-1998", *Quarterly Journal of Economics*, 118 (1), y T. Piketty (2014), *Capital in the Twenty First Century*, op. cit.

¹² En el caso de México, a partir de 1980 las enmiendas constitucionales se suceden por cientos hasta transmutar el mismo sentido de la carta revolucionaria de 1917. La despolitización de las políticas estabilizadoras no se ha reservado a las economías en desarrollo. El Banco de Inglaterra, por ejemplo, se ha liberado del control gubernamental para determinar por sí mismo la política monetaria.